

Tribunal	:	Corte Suprema
Fecha	:	20/07/2006
Rol	:	3275-2006
Partes	:	Sindicato de Empresa Número 1 de Compañía Minera Zaldívar con Compañía Minera Zaldívar
Ministros	:	María Antonia Morales Villagrán; Milton Juica Arancibia; Ricardo Gálvez Blanco
Descriptor	:	Amenaza del derecho constitucional a la vida y a la integridad física y síquica. Inobservancia de medidas tendientes a cumplir condiciones básicas de higiene y salubridad. Falta de legitimación activa del recurso por falta de individualización de los solicitantes. Improcedencia de la necesidad de individualización. Naturaleza cautelar de la acción.

Doctrina

El artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que "el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza...". La expresión "el que", como se desprende de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, es omnicomprendiva de toda persona que sufra acto u omisión arbitraria o ilegal, no sólo respecto de personas individuales, sino también jurídicas, e incluso grupo de personas que carecen de personalidad jurídica

El recurso de protección fue establecido como un medio pronto y eficaz de prestar inmediato amparo al afectado, reaccionando ante situaciones de hecho anormales y evidentes que de por sí sean claras y atenten contra las garantías constitucionales. Dada su estructura cautelar, no es la vía idónea para corregir las deficiencias que pudieran existir en las instalaciones mineras para el desarrollo de sus actividades, existiendo otras instancias.

Áreas del Derecho : Derecho Constitucional; Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social;

Legislación aplicada en el fallo : Código del Trabajo art 184; Constitución Política art 20;

Texto completo de la Sentencia

Antofagasta, diecinueve de junio de dos mil seis.

Vistos:

Que a lo principal de fs. 7 don René Alfredo Godoy Rivera en su calidad de Presidente y en representación del Sindicato de Empresa Nº 1 de Compañía Minera Zaldívar deduce recurso de protección en contra de la citada compañía, a favor de los trabajadores que se desempeñan en esa faena minera, por haber incurrido en omisión ilegal que amenaza seriamente, la garantía constitucional establecida en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el proceso productivo en la Empresa exige una serie de medidas que protegen a los trabajadores de la exposición de agentes contaminantes en la ejecución de sus labores, a fin de resguardar su salud e integridad física. Así la empresa debe dar cumplimiento a las normas contenidas en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por

decreto supremo N° 594 del Ministerio de Salud, el que dispone en su artículo 21 que cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores afectados, y en su artículo 27 que en aquellos lugares en que los trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, estos deberán tener dos casilleros individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la vestimenta habitual y que, en tal caso, será de responsabilidad del empleador hacerse cargo del lavado de ropa de trabajo y adoptar las medidas que impidan que el trabajador las saque del lugar de trabajo. Sin embargo, la empresa recurrida no mantiene implementadas casas de cambio acorde a la normativa aplicable, ni controla que en ella se realice el cambio de ropa, para evitar que la indumentaria sucia y contaminada sea llevada por los trabajadores a sus habitaciones y casino de alimentación, por el contrario ha dispuesto que estos hagan su aseo e higiene personal, como el cambio de su ropa de trabajo, antes y después del inicio de la jornada laboral, en sus propios dormitorios del campamento, movilizándolos directamente de su lugar de trabajo a éste último, donde se encuentran sus dormitorios y casino de alimentación. Sostienen que en reunión realizada con el Secretario Regional Ministerial del Trabajo se le hizo presente esa situación sobre el no uso de casas de cambio indicándoles posteriormente, en forma verbal, que producto de la fiscalización que requirieran se habían constatado graves infracciones a la normativa básica sanitaria, haciéndoles entrega el 5 de abril de 2006 de un ordinario emanado del señor Inspector Provincial del Trabajo en donde se les informa que la fiscalización requerida por la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, respecto de las casas de cambio en faenas de la Empresa Compañía Minera Zaldivar fue realizada en su oportunidad, constatándose hechos constitutivos de infracciones a la legislación laboral, por lo que se cursaron las respectivas multas a la empresa y que al realizarse una nueva fiscalización por la Inspección del Trabajo el 4 de abril en curso se pudo ratificar que la referida empresa no había cumplido las instrucciones de implementar las casas de cambio acorde a la normativa legal y reglamentaria vigente.

Manifiestan que actualmente la recurrida no cumple con la normativa aplicable, ya que no existen casas de cambio habilitadas con duchas operativas en número suficientes, y de compartimentos separados para la ropa contaminada y la ropa limpia, evitando que sea sacada por los trabajadores del lugar de trabajo a áreas de descanso y alimentación, lo que ha significado que los trabajadores se han visto forzados a emplear para su aseo e higiene personal los baños de sus dormitorios en el campamento, llevando hasta ellos sus ropas sucias y contaminadas, lo que genera una condición de seria amenaza a la salud de los trabajadores, violándose con ello además lo previsto en el inciso final del artículo 9° del referido reglamento que dispone que el empleador deberá adoptar las medidas necesarias para que los dormitorios se mantengan limpios, permitiéndose además que concurran a los comedores del campamento con su ropa de trabajo contaminada.

Aduce que la inobservancia del empleador constituye una omisión ilegal al dejar de cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 184 del Código del Trabajo en cuanto ha omitido implementar casas de cambio con duchas con agua caliente en número suficiente, disponer de casilleros individuales y separados para la ropa de trabajo y ropa limpia, mantener la limpieza en los dormitorios, impedir que los trabajadores saquen del lugar la ropa sucia o contaminada y resguardar que el consumo de alimentos se efectúe en condiciones adecuadas de higiene; y con lo dispuesto en los artículos 3°, 9°, 21° y 27 del D.S. N° 594, lo que ha forzado a los trabajadores a efectuar su aseo personal en sus propios dormitorios, contaminando su lugar de descanso, permitiendo además, el consumo de alimentos en los casinos sin mantener la higiene adecuada. Todo este incumplimiento ha sido constatado por los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo, quienes tienen el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones.

Expresan por otra parte, que la omisión o inobservancia de las normas legales y reglamentarias se ha mantenido en el tiempo, afectando y/o amenazando actualmente la vida, salud e integridad física de los trabajadores. Esta omisión legal se produce en cada uno de los días en que se deja de ejecutar o cumplir con las obligaciones que la ley y sus reglamentos ordenan para el desarrollo de una actividad permanente en faenas con exposición a contaminantes de diversa naturaleza y, que si bien esta omisión ocurrió hace meses atrás, también se ha producido en cada uno de los 15 días anteriores a la presentación de este recurso, que habilita plenamente para interponerlo al tenor del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, lo que ha sido reconocido reiteradamente por la jurisprudencia de los tribunales de justicia.

Las omisiones ilegales enunciadas constituyen una amenaza o perturbación a la garantía establecida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y que la amenaza a esta garantía constitucional no cesa por el solo hecho de que la recurrida implemente salas o casas de cambio en concordancia con el D.S. N° 594, sino dispone efectivamente que los trabajadores realicen en ella su aseo e higiene personal y el cambio de ropa de trabajo, evitando que éstos se dirijan al campamento con la ropa sucia o contaminada.

Aducen en seguida que los sistemas de control administrativo son irrisorios en su capacidad disuasiva o

coercitiva sobre la conducta de la empresa, ya que la simple aplicación de una multa no puede efectivamente obligarla a enmendarla y es por ello que ante la ineficacia en el resguardo y protección de las garantías fundamentales por parte de procedimientos administrativos, se ha establecido el recurso de protección como medio expedito y eficaz para restablecer el imperio del derecho, cuando obran suficientes antecedentes para concluir que existe un acto u omisión ilegal que amenaza, perturba o priva a las personas de sus garantías fundamentales.

Solicita se disponga como medida para restablecer el imperio del derecho que la recurrida debe implementar en un plazo prudencial casas o salas de cambio de ropa de los trabajadores, con las condiciones, dispositivos, ubicaciones y en general cada una de las reglas que disponen el D.S. N° 594 del Ministerio de Salud y que la empresa deberá adoptar las medidas para que los trabajadores realicen única y exclusivamente en dichas salas o casas su aseo e higiene personal y el cambio de ropa, impidiendo que los trabajadores lleven consigo a sus dormitorios o a los casinos de alimentación ropa sucia o contaminada utilizada durante la jornada de trabajo.

Informando a fs. 32 la recurrida sostiene en primer término la extemporaneidad del recurso ya que ha transcurrido en exceso el plazo fatal de 15 días corridos previsto en el Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, lo que es reconocido por el mismo recurrente en el libelo al señalar que ha estado en pleno y cabal conocimiento de la supuesta omisión ilegal que imputa su parte, desde al menos 6 meses antes de la fecha en que fue interpuesto el recurso. Para sostener tan manifiesta extemporaneidad se vio obligado a acudir a una interpretación acomodaticia consistente en que la omisión que denuncia sería de aquellas que por reiterarse y ejecutarse permanentemente, hacen que el plazo para recurrir de protección se renueve día a día. Tal tesis es contraria a lo dispuesto en el numeral 1° del referido Auto Acordado, ya que nadie discute que este plazo para recurrir es objetivo, por lo que debe contarse desde la fecha en que se incurrió en el acto u omisión ilegal y/o arbitrario, con total prescindencia de si dicho acto u omisión se ejecuta permanentemente a lo largo del tiempo, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia de los tribunales de justicia.

En segundo término, sostiene la falta de legitimidad activa del Sindicato de Empresa N° 1 de Compañía Minera Zaldívar para interponer el recurso, desde que el presupuesto esencial de esta acción es la existencia de una persona, natural o jurídica, cuyos derechos constitucionales hayan sido ilegítimamente afectados y no una acción de carácter popular que pueda deducirse a nombre de un grupo indeterminado de personas.

En la especie el recurso ha sido interpuesto por el Presidente de Sindicato N° 1 de Compañía Minera Zaldívar a favor de los trabajadores de dependencia de dicha empresa, ninguno de los cuales ha sido individualizado en dicho libelo, lo que demuestra la falta de legitimación activa del recurrente al arrogarse la representación de dicho grupo de trabajadores, sin individualizar las personas específicas y concretas cuyos derechos habrían resultado presuntamente afectados.

Manifiesta en seguida, que ha dado íntegro y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo y artículos 3°, 9°, 21° y 27° del D.S. N° 594, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, adoptando las medidas necesarias para proteger, en forma eficaz, la vida y la salud de sus más de 700 trabajadores. Expresa que la mina que explota Compañía Minera Zaldívar es una de las más modernas del país, que las faenas que en ella se ejecutan están sujetas al cumplimiento de los más altos y exigentes estándares de seguridad existentes en el mundo, haciéndose acreedora de múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional que han premiado la forma en que ha enfrentado el tema de la higiene, salubridad y seguridad de sus trabajadores, debiendo destacarse la certificación ISO 14001 que premió la gestión en materia sanitaria y ambiental. Destaca, además, que cuenta con un detallado y exhaustivo Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, presentando uno de los índices más bajos de la industria minera nacional en materia de accidentes laborales y de enfermedades profesionales, ya que desde el año 1996 hasta esta fecha sólo han existido dos casos puntuales de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo, dentro de un universo de 700 trabajadores permanentes. Los hechos narrados dejan en evidencia que las medidas que ha adoptado por más de 10 años han sido más que suficientes para cumplir con lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo y 3° del reglamento ya citado.

Señala que no existe infracción a los artículos 9°, 21° y 27° del reglamento en comento, ya que ha adoptado las medidas necesarias para que los dormitorios de los trabajadores se mantengan limpios, al haber contratado a empresas externas para prestar servicios de aseo y lavado de ropa, existiendo modernas instalaciones con duchas provistas de agua caliente y fría para todos sus trabajadores en el campamento en que pernoctan éstos, careciendo de asidero lo afirmado por el recurrente en cuanto a la ubicación de las casas de cambio o vestidores ya que el reglamento no indica el lugar físico en que las mismas deben ser instaladas. Asimismo, cuenta con los compartimientos separados para ropa sucia y limpia para los trabajadores que se encuentran expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, como lo exige el artículo 27 del mismo cuerpo legal.

Refiere en seguida, que la Inspección del Trabajo carece de competencia para fiscalizar el cumplimiento del reglamento ya tantas veces aludido, ya que la única autoridad con facultades suficientes para hacerlo es el Servicio de Salud, como lo disponen los artículos 2º y 131º de dicho cuerpo legal, de manera que el acta de inspección acompañada carece de valor probatorio, puesto que los hechos que en ella se consignan no fueron constatados ni aplicados por la única autoridad con competencia en la materia. Además, las eventuales infracciones que constató la Inspección del Trabajo son contradictorias con las constatadas por el Servicio de Salud de la II Región, que no hizo observación ni reparo alguno al cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales referidas.

Añade que lo que se denuncia por el presente recurso ya se encuentra sometido al imperio del derecho y, en particular, a la fiscalización y supervigilancia del Servicio de Salud, el que en inspección practicada el 31 de agosto de 2005 no formuló reproche ni observación alguna respecto del cabal e íntegro cumplimiento de las disposiciones legales ya citadas.

Luego expresa que no existe vulneración al derecho a la salud de los trabajadores y por lo tanto, a la vida e integridad física que se les asegura en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, ya que como se infiere de numerosos pasajes de su libelo la garantía que el recurrente estima verdaderamente amenazada no es esta última sino el que asegura el N° 9 de dicho precepto, esto es, el derecho a la salud de sus trabajadores, derecho éste que no se encuentra previsto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y por lo mismo no puede subsanarse por la vía de alegar que al mismo tiempo se produce una afectación al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. En cualquier caso, no existe en la especie vulneración alguna de esos derechos, desde que las labores que realizan los trabajadores lo hacen con estricta sujeción a la Resolución de Calificación Ambiental dictada por la autoridad competente, y como demostración de esto es el hecho que desde el año 1999 hasta la fecha ningún trabajador ha presentado enfermedades profesionales producto de haber tenido contacto con sustancias supuestamente tóxicas, infecciosas y contaminantes.

Concluye que el presente recurso incide en materias que son propias de un juicio de lato conocimiento, completamente ajenas a la naturaleza cautelar y de urgencia que tiene el presente arbitrio constitucional, ya que no basta con afirmar que los compartimientos para la ropa sucia y limpia no son suficientes, sin que se acredite previamente a través de informes técnicos y demás medios de prueba legal aportado por las partes, que existen sustancias tóxicas o infecciosas, trabajadores expuestos a dichas sustancias y su número como la no existencia de los referidos compartimientos para cada uno de ellos, lo que constituye una cuestión de prueba que excede los márgenes propios del recurso de protección. Pide el rechazo del mismo por no cumplirse los requisitos previstos para su admisibilidad y procedencia, con costas.

De fs. 1 a 6 rolan documentos acompañados por la recurrente y aquellos solicitados por la misma a la Dirección Regional del Trabajo y Director Regional del Servicio de Salud de esta ciudad, allegados de fs. 61 a 95 y 102 y 103; a fojas 107 disco compacto que contiene grabación fílmica guardada en custodia y, de fs. 109 a 111 Ordinario emanado de la Directora del Servicio de Salud de Antofagasta.

De fs. 114 a fs. 130 rola Acta de Inspección Ocular acompañada por la recurrida y todos aquellos documentos que obran en el cuaderno separado, conforme se decretara a fs. 141.

A fs. 143 se decreta medida para mejor resolver complementada a fs. 148.

A fs. 151 se da por cumplida la medida por mejor resolver.

Considerando:

Primero: Que como se explicitara en la parte expositiva don René Alfredo Godoy Rivera, en su calidad de Presidente y en representación del Sindicato de Empresa N° 1 de la Compañía Minera Zaldivar interpone recurso de protección en contra de la citada Compañía y el fundamento de hecho lo hace consistir en haber incurrido en omisión ilegal ante el no cumplimiento e inobservancia de las medidas que debe ejecutar tendientes a cumplir con las condiciones básicas de salubridad e higiene a fin de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, conforme a lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, y artículos 3º, 9º, 21º y 27º del D.S. N° 594, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, consistentes en haber omitido el cumplimiento forzoso de implementar casas de cambio con duchas con agua caliente en número suficiente, disponer de casilleros individuales y separados para ropa de trabajo y ropa limpia, mantener la limpieza en los dormitorios, evitando llevar ropa contaminada a ellos, impedir que los trabajadores saquen del lugar de trabajo la ropa sucia contaminada y resguardar que el consumo de alimentos se efectúe en condiciones adecuadas de higiene, todas las cuales constituyen una amenaza o perturbación a la garantía establecida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Solicita se disponga que la recurrida debe implementar efectivamente las casas o salas de

cambio de ropa de los trabajadores conforme a lo dispuesto en el D.S. 594, debiendo la empresa adoptar las medidas para éstos realicen en dichas salas su aseo e higiene personal y el cambio de ropa sucia o contaminada, impidiendo que la lleven a sus dormitorios o a los casinos de alimentación.

Segundo: Que por su parte la recurrida sostiene en primer lugar la extemporaneidad del recurso, basada en que ha transcurrido con creces el plazo de quince días corridos establecido en el Auto Acordado respectivo, desde que el mismo recurrente expresa que ha estado en pleno y cabal conocimiento de la supuesta omisión ilegal desde al menos seis meses antes de la fecha en que interpuso el recurso, aduciendo la tesis de la ejecución permanente lo que hace que el plazo para recurrir se renueve día a día. Manifiesta que este plazo es objetivo por lo que debe contarse desde la fecha en que se incurrió en el acto u omisión ilegal o arbitraria que se denuncia, con total prescindencia de si dicho acto se ejecuta permanentemente a lo largo del tiempo, de forma que la circunstancia de que la supuesta omisión ilegal que se denuncia persista en el tiempo, no es óbice para rechazarlo por tal motivo.

En segundo término alude a la falta de legitimación activa del Presidente del Sindicato, quien se arroga la representación de un grupo de trabajadores sin individualizarlos, siendo presupuesto esencial de esta acción que el recurrente determine concretamente a las personas en cuyo favor se impetra la acción cautelar.

Manifiesta en seguida, que ha dado íntegro y cabal cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que se le imputa haber infringido, adoptando todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de sus más de setecientos trabajadores, ya que las faenas que se ejecutan en dicha Compañía están sujetas al cumplimiento de los más altos y exigentes estándares de seguridad que existen en el mundo, que la ha hecho acreedora de múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional como la Certificación ISO 14001 que premió la gestión integral en materia sanitaria y ambiental, siendo el índice de accidentes laborales y enfermedades profesionales que presenta uno de los más bajos de la industria minera nacional, adoptando las medidas concernientes para que los dormitorios de los trabajadores se mantengan limpios contratando empresas externas que se encargan de prestar servicios de aseo y lavado de ropa, existiendo modernas instalaciones que les proveen de los servicios higiénicos necesarios para su aseo personal, y servicio de duchas con agua caliente y fría, contando con los compartimientos separados para ropa sucia y limpia para los trabajadores que en el ejercicio de sus labores se encuentren expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas.

Expresa que la Inspección del Trabajo carece de competencia para fiscalizar el cumplimiento del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas, siendo el Servicio de Salud la única autoridad con facultades suficientes para hacerlo, como lo dispone los artículos 2 y 131 del referido texto legal, el que no hizo observación ni reparo alguna acerca del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9, 21 y 27 del mismo. Manifiesta que el asunto que motivó la interposición del recurso ya se encuentra sometido al imperio del derecho al ser fiscalizada en diversas ocasiones por el Servicio de Salud de la II Región quien en la última inspección practicada el 31 de agosto de 2005, no formuló reproche al incumplimiento de las disposiciones legales citadas del referido reglamento.

Sostiene además, que la garantía o derecho constitucional que verdaderamente se estima infringida no se encuentra prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ya que el recurrente al fundamentar su acción en numerosos pasajes de su libelo se refiere a que la supuesta omisión ilegal constituiría una amenaza a la salud de los trabajadores y, que en todo caso, no existe vulneración alguna al derecho a la salud, vida e integridad física y psíquica de los trabajadores de Compañía Minera Zaldívar.

Concluye finalmente que el recurso deberá rechazarse porque el mismo incide en materias propias de un juicio de lato conocimiento, ajenas a la naturaleza cautelar y de urgencia que tiene el presente arbitrio constitucional.

Tercero: Que en cuanto a la extemporaneidad del recurso alegada, ha de tenerse presente que fue la complementación de la fiscalización realizada por la Inspección del Trabajo el día 4 de abril de 2006 la que fijó los incumplimientos que afectarían las garantías constitucionales que los recurrentes indican vulneradas, y al haberse interpuesto la acción de protección el 6 de abril en curso, éstos accionaron dentro de plazo.

En lo que dice relación con la falta de legitimación activa, cabe precisar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que "el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 números 1, 2, 3...". La expresión "el que", como se desprende de la historia fidedigna del establecimiento de la ley y artículo 2º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso, es omnicomprendiva de toda persona que sufra acto u omisión arbitraria o ilegal, no sólo respecto de personas individuales sino también jurídicas e incluso grupo de personas que carecen de personalidad jurídica.

El presente recurso fue interpuesto por un grupo de trabajadores, a saber, aquellos que desempeñan en la faena minera de Compañía Minera Zaldívar, de forma que se cumple con el requisito de singularización e

individualización que exige el Auto Acordado sobre la materia.

Cuarto: Que como puede observarse, el accionar de los recurrentes se circunscribe que la recurrida no cumple con la normativa contemplada en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por D.S. N° 594 del Ministerio de Salud, en cuanto a la inexistencia de casas de cambio habilitadas con duchas operativas en número suficiente donde los trabajadores realicen su aseo e higiene personal y el cambio de ropa de trabajo, y compartimentos separados para la ropa contaminada o sucia, la que es llevada por los trabajadores desde el lugar de trabajo a áreas de descanso y alimentación, poniendo en riesgo su salud e integridad física, solicitando que la Empresa Minera Zaldívar implemente esas casas de cambio con las condiciones, dispositivos, ubicaciones acorde a las reglas que dispone el cuerpo legal referido.

Quinto: Que la cuestión debatida nos obliga a adentrarnos en el estudio de la preceptiva atinente; a saber el D.S. N° 594 ya tantas veces aludido.

En efecto, el artículo 3° de este cuerpo legal dispone que "la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella".

Por su parte, el artículo 9° en su párrafo final dispone que "el empleador deberá adoptar las medidas necesarias para que los dormitorios se mantengan limpios". A su vez el artículo 21 en su inciso 2° prescribe que "cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores afectados...". El artículo 27 del texto en comento establece en su inciso final "En aquellos lugares en que los trabajadores estén expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, éstos deberán tener dos casilleros individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la vestimenta habitual. En tal caso, será responsabilidad del empleador hacerse cargo del lavado de la ropa de trabajo y adoptar las medidas que impidan que el trabajador las saque del lugar de trabajo".

El artículo 184 del Código del Trabajo estatuye que "El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en la faena, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales...".

Sexto: Que el examen de estas disposiciones trae claridad en cuanto a las condiciones sanitarias y ambientales como deben realizarse las labores en los lugares de trabajo, destinadas a resguardar la salud y el bienestar de las personas que allí se desempeñan.

Corresponde, entonces, determinar si a la luz de los antecedentes acompañados en autos la empresa recurrida cumple con la normativa reseñada y si los residuos de las sustancias que portan los trabajadores en sus ropas ponen en peligro sus vidas e integridad física.

Según Acta de Inspección del Servicio de Salud allegada a fs. 68, de fecha 8 de abril de 2004, se constataron ciertas deficiencias en las condiciones ambientales en el campamento de la minera y que no existe casa de cambio en el sector, que el trabajador llega al área con su ropa de trabajo y se retira de ésta con ropa sucia hasta su habitación; en inspección del mismo Servicio de 31 de agosto de 2005; conforme a documentos agregados a fs. 52, 53 y 54 del cuaderno de documentos, se realiza Acta de Cumplimiento al constatar correcciones relacionadas con el D.S. N° 594 y 133, ambos del Ministerio de Salud, y en inspección de 28 de noviembre del mismo año para verificar cumplimiento a indicaciones efectuadas en visita anterior, se comprueba cumplimiento al 100% de ellas.

En visita inspectiva llevada a cabo por la Inspección del Trabajo el 23 de noviembre de 2005, según documentos que corren aparejados a fs. 77 y 78, 93, 94 y 95 se sanciona con multa a la empresa recurrida por no contar con casa de cambio en las secciones pilas de lixiviación, remanejo y SEW, realizándose con posterioridad, el 4 de abril de 2006, una fiscalización complementaria en la que se constata que las casas de cambio se encuentran en buen estado, pero no cuentan con duchas para los trabajadores y que las personas que trabajan en las áreas de ácidos, se van con esa misma ropa hasta sus habitaciones.

A fs. 102 corre informe del Secretario Regional Ministerial de Salud II Región Dr. Enrique Castro Munizaga en el que señala que los agentes contaminantes químicos y/o físicos identificados por esa Secretaría en las diferentes áreas de trabajo de la Compañía Minera Zaldívar son principalmente sílice, aerosoles ácidos (ácido sulfúrico), ruido y radiaciones ionizantes, las que no corresponden a la categoría de tóxicos y que el proyecto minero de esa compañía ha sido sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde no se ha identificado en las operaciones el uso de nuevas sustancias de carácter tóxico o infeccioso que puedan afectar a los trabajadores; y que por exigencia de esta autoridad, la empresa lleva un programa de

vigilancia médica de los trabajadores expuestos a contaminantes señalados desde el año 1999. A fs. 55 del cuaderno de documentos corre allegado certificado emitido por la Mutual de Seguridad en el cual se certifica que en el período 1999 2006 no se han atendido trabajadores de Minera Zaldívar por contaminantes cuyas concentraciones hayan excedido los máximos permisibles establecidos en el D.S. N° 594 y/u otra normativa aplicable, siendo evaluados dos por exposición a ruido.

Rola, además, a fs. 114 de estos autos Acta de Inspección Ocular realizado por el Notario Público de la Quinta Notaría don Edmundo Dagoberto Devia Osorio de 8 de mayo de 2006 quien constata los siguientes hechos: que en cada sector de trabajo de la mina existen construcciones permanentes habilitadas como "salas de vestidores", que cuentan con lavatorios y excusados, en cantidad suficiente para todos los trabajadores que laboran en cada sector. Además, dichas instalaciones cuentan con casilleros o lockers para cada uno de los mismos, que el denominado sector húmedo aquel en el cual existe presencia de ácido sulfúrico, y en donde labora una pequeña parte del personal de Compañía Minera Zaldívar dichas construcciones permanentes cuentan, adicionalmente con duchas de agua caliente y fría, en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos los trabajadores que laboran en dicho sector. Los "lockers" instalados en los vestidores del "sector húmedo", cuentan con una separación para ropa limpia y la ropa de trabajo y que la ropa de trabajo no estaba en contacto con la vestimenta habitual de los trabajadores de dicho sector; que la totalidad de los trabajadores de Compañía Minera Zaldívar cuentan con duchas con agua caliente y fría las que se encuentran instaladas en el sector del campamento, que cada uno de los trabajadores de dicha Compañía cuenta con un dormitorio individual, los que se mantienen limpios, aseados, ordenados y en óptimas condiciones y, que en sus dormitorios disponen de bolsas o sacos de lavado, dentro de los cuales depositan su ropa sucia la que luego es entregada a una empresa externa de lavandería denominada La Ideal.

A fojas 151 y 152, corre aparejado informe evacuado por el Secretario Regional Municipal de Salud de Antofagasta, decretado como medida para mejor resolver, donde se informa que los residuos de las sustancias que transportarían en su ropa los trabajadores a sus dormitorios o casino de alimentación, que según sus antecedentes son sílice en polvo total y aerosoles ácidos en nave de electrobtención, son contaminantes, pero no elementos tóxicos nocivos o venenosos que pongan en peligro la vida y la integridad física, pero si lo son en cuanto los niveles y tiempo de exposición sean altos y prolongados y no se tome medida preventiva alguna.

Séptimo: Que del mérito de los antecedentes analizados aparece en evidencia que si bien la empresa recurrida no contaba en un comienzo con casas de cambio en las secciones de pilas de lixiviación, remanejo y SEW, ello fue subsanado posteriormente. Sin embargo, no se dispone de duchas en dichos lugares de trabajo, pero si en el campamento y en el sector húmedo donde dichas construcciones cuentan con duchas de agua caliente y fría en cantidad suficiente existiendo, además, lockers separados para ropa limpia y de trabajo, como lo dispone el artículo 27 de la normativa analizada anteriormente en relación a las sustancias tóxicas o infecciosas.

En este orden de cosas, debe precisarse que el reglamento ya tantas veces mencionado, sólo determina donde deben estar situados los vestidores, pero no indica el lugar de ubicación de las duchas, las que, como ya se refiriera se encuentran en el campamento, a excepción de los lugares de trabajo en que los trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, donde expresamente lo dispone el reglamento, debe contarse con vestidores y duchas de agua caliente y fría para los trabajadores.

Octavo: Que según lo dispone el informe evacuado por el Secretario Regional Ministerial de Salud, las ropas contaminadas, constituirían un peligro a la vida y a la integridad física cuando los niveles y tiempo de exposición sean altos y prolongados y no se tomen medidas preventivas.

Noveno: Que del mérito de los antecedentes explicitados en el motivo sexto, se advierte que el proyecto minero de la Compañía Minera Zaldívar está sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin que se haya identificado en las operaciones el uso de nuevas sustancias de carácter tóxico o infecciosos que puedan afectar a los trabajadores, llevando adelante un programa de vigilancia médica de los expuestos a contaminantes, sin que durante el período 1999 2006 se hubieran tenido trabajadores por contaminantes cuyas concentraciones hayan excedido los máximos permisibles.

Conforme se desprende de los mismos, se ha logrado establecer que los trabajadores disponen de vestidores o casas de cambio para desprenderse de su ropa sucia o contaminada no tóxica, sin que existan antecedentes suficientes que permitan establecer que la ausencia de duchas en las casas de cambio o vestidores ubicados en los lugares de trabajo, esté afectando de modo directo la vida y la salud física y psíquica de los trabajadores, habiendo la empresa recurrida adoptado las medidas de resguardo pertinentes para proteger la salud de éstos.

Décimo: Que el recurso de protección fue establecido como un medio pronto y eficaz de prestar inmediato amparo al afectado, reaccionando contra situaciones de hecho anormales y evidentes que de por sí sean

claras y atenten contra las garantías constitucionales.

Dada su estructura cautelar, no es la vía idónea para corregir las deficiencias que pudieran existir en las instalaciones mineras para el desarrollo de sus actividades, existiendo otras instancias, entiéndase reglamento interno, facultades fiscalizadoras de la Inspección del Trabajo y la competencia que expresamente le corresponde en este orden de materias al Servicio de Salud.

Undécimo: Que en este mismo discurrir, es preciso acotar que de conformidad a lo establecido en los artículos 184, 189 y 191 del Código del Trabajo, le compete a la Inspección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado en virtud de las leyes que los rigen, como lo es el Servicio de Salud quien, en virtud de las normas establecidas en el decreto supremo N° 594, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, le corresponde también fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones de dicho reglamento.

Duodécimo: Que en consecuencia, según los antecedentes reseñados, no existe alguna acción u omisión que cause la privación, perturbación o amenaza del derecho a la vida, salud o integridad física de las personas, porque las deficiencias advertidas no son esenciales en la afectación de alguno de estos derechos, como tampoco se demuestra que alguno de los trabajadores haya sufrido un desmedro en la salud, vida o integridad física, con relación al proceso de cambiar de ropa de trabajo a la salida de las respectivas faenas, debiendo, por tanto rechazarse el recurso, sin costas.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto a fojas 7 por don René Alfredo Godoy Rivera, en representación del Sindicato de Empresa N° 1 de Compañía Minera Zaldívar.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministro Titular Sra. Laura Soto Torrealba.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Titulares doña Laura Soto Torrealba, señor Oscar Clavería Guzmán y doña Gabriela Soto Chandía. Autoriza el Secretario Subrogante señor Sergio Montt Martínez.

Rol N° 309 2006.

Santiago, veinte de julio de dos mil seis.

A fojas 195: a lo principal téngase presente; y al otrosí, venga en forma la delegación del poder.

A fojas 197: a lo principal, téngase presente; y al otrosí, no ha lugar a los alegatos allí solicitados.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de diecinueve de junio último, escrita a fojas 155.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Ricardo Gálvez, Milton Juica y señorita María Antonia Morales; y los Abogados Integrantes señores Oscar Herrera y Carlos Kumsemuller.

Autorizado por la Secretaria Subrogante señora Carola A. Herrera Brummer.

Rol N° 3.275 2006.